

Solidaridad y protección social en Grecia

María PETMESIDOU*

Resumen

Grecia y España comparten algunas características comunes, reteniéndose otras como específicas de la sociedad griega. La autora insiste en éstas con una presentación resumida del caso griego, atendiendo al papel del Estado y la estratificación social. Se describe críticamente la naturaleza del Estado de bienestar griego. Se analiza el sistema griego de protección social y la naturaleza de la crisis que actualmente enfrenta, agudizada por las exigencias de la Unión Económica y Monetaria europea.

Abstract

*Solidarity and social protection in Greece
Greece and Spain share a set of common characteristics, although they maintain their specific features. The author insists in Greek specific characteristics paying attention to the State role and social stratification or class system. The nature of Greek Welfare State is critically described. Social protection is also analyzed, making criticism about its current financial crisis, strengthened by the requirements of the European Economic and Monetary Union.*

Grecia comparte muchas de las características de otros países del sur de Europa. Es un país de industrialización tardía, con un gran sector agrícola. Durante largo tiempo, después de la segunda guerra mundial, fue gobernado por regímenes autoritarios. Fueron regímenes cuasiparlamentarios desde principios de los años cincuenta hasta finales de los sesenta, y un régimen dictatorial desde entonces hasta mediados de los años setenta. Por consiguiente, las estructuras políticas de tipo democrático se desarrollaron solamente en las dos últimas décadas. Las prestaciones de protección social han sido durante mucho tiempo poco desarrolladas: la fa-

milia se consideraba el principal apoyo. El tardío desarrollo de un Estado de bienestar se produjo en la primera mitad de los años ochenta. Era un momento de reestructuración económica global que intensificó la competitividad económica a nivel internacional y que fue acompañado de significativos cambios demográficos y de bajísimos índices de crecimiento económico, cercanos a cero. Estos factores condujeron a una crisis fiscal del Estado tan seria que amenazaba al recientemente creado Estado de bienestar, antes de lograr un consenso social y de asentar un concepto de solidaridad que permitiera madurar totalmente una cultura universalista y una ciudadanía social.

* Departamento de Sociología. Universidad de Creta (Grecia)

Al mismo tiempo, Grecia se diferencia de los países de la llamada orilla latina -"Latin rim"- del sur de Europa (Italia, España y Portugal), ya que por su posición geográfica -los Balcanes- y por su trayectoria histórica ha recibido en gran medida la influencia sociocultural de los países del este. Por ejemplo, el fuerte control que el Estado ejerce sobre la sociedad civil es una característica común entre Grecia y otros países balcánicos —incluyendo Turquía— que pone de manifiesto la poderosa influencia institucional de la autocracia rusa y otomana.

En este trabajo voy a describir muy brevemente las principales características de la estructura social griega, haciendo hincapié en la relación entre la sociedad civil y el Estado, así como en el tipo de los conflictos sociales y la solidaridad social. De esta forma se dilucidarán las especificidades de Grecia en comparación con los otros países del sur de Europa. La segunda parte ofrece una visión panorámica de las tendencias de la protección social, concluyendo con unas consideraciones relativas a los retos a que se enfrenta el sistema griego de protección social, en esta segunda mitad de los noventa.

Las peculiaridades de la sociedad griega y de su cultura

Con el fin de distinguir a Grecia de otros países del sur de Europa se

señalarían algunas características, atendiendo a diferentes aspectos.

El primer aspecto lo constituye la estructura económica. Grecia aún tiene un gran sector agrícola: el 21% de su fuerza de trabajo está ocupada en este sector, al lado del 8% de Italia, el 10% de España y el 12% de Portugal. Durante los años cincuenta y sesenta Grecia experimentó un considerable crecimiento industrial, pero el declive llegó a principios de los setenta, incluso antes de que el empleo en la industria alcanzase su punto máximo. De forma paralela, en las dos últimas décadas, disminuyó el empleo en el sector agrario, mientras que se incrementó el empleo en el sector servicios. Los servicios que han experimentado mayor crecimiento son el turismo, el comercio y los servicios personales, sobre los que se ha formado una gran clase media urbana, compuesta por pequeños comerciantes, trabajadores autónomos en los servicios personales, pequeños empresarios, artesanos y profesionales autónomos. En cierto sentido, Grecia se saltó la industrialización y esto tuvo consecuencias significativas para el logro de una cultura de la solidaridad y de un consenso colectivo sobre la ciudadanía social de base universalista.

En estrecha relación con lo anterior, Grecia cuenta con un gran volumen de autoempleo y de economía sumergida. Tiene, de los cuatro países del sur de Europa, el índice más elevado de autoempleo (el 47% de su fuerza laboral, respecto al 29% de Italia, el 26% de España y el 27% de Portugal). Las actividades económicas

informales equivalen a un 40-45% de su PIB producido en la economía formal; mientras que en Portugal, similar a Grecia en cuanto a población y nivel de desarrollo, la economía sumergida alcanzaba solamente el 15% del PIB, a mediados de los noventa.

Estas condiciones favorecen la expansión del estrato social de los trabajadores eventuales, esto es, los que no tienen una estabilidad en el mundo laboral, ya que cruzan las fronteras existentes entre el autoempleo y el empleo, el sector público y el privado, la economía formal e informal. Abundan los ejemplos de este fenómeno: se podría mencionar el caso de la población rural que es propietaria de minifundios y que se emplea en trabajos temporales de la industria y servicios, tales como el turismo. Otro ejemplo es el de los empleados públicos que llevan su propio negocio privado en sus horas libres, o bien que ayudan en la empresa familiar. Vale también el caso de los artesanos que son en parte trabajadores asalariados y en parte autónomos. Este fenómeno se traduce, indudablemente, en una gran confusión a la hora de establecer fronteras sociales, e impone limitaciones a un modelo de integración social que esté basado en la acción social colectiva y en los valores solidarios.

Tercera característica, el cambio rápido desde unas estructuras agrarias a una economía orientada hacia los servicios. Este cambio contribuyó, en las últimas décadas, a la reproducción de modos tradicionales de integración social y política, basados en estructuras paternalistas y clientelis-

tas. Cuanto más rápido es el salto de una sociedad predominantemente agraria a una sociedad post-industrial, menores son las oportunidades de desarrollo de una cultura de relaciones contractuales y de formas de organización de los intereses colectivos y la acción social para su desarrollo que promueva la ciudadanía social. Este es particularmente el caso de Grecia, donde son débiles las tradiciones de relaciones contractuales, la solidaridad colectiva y una sociedad civil activa, mientras que prevalecen los fenómenos de estatismo y clientelismo. Es lo que se advierte en la amplia intervención del Estado en la economía y en los procesos tan difundidos de creación y distribución de rentas a través de criterios más políticos que de mercado.

Aunque el estatismo y las formas particularistas-clientelísticas de organización social son características comunes a las sociedades del sur de Europa, se acentúan más en el sur y sureste de la Europa mediterránea: el sur de Portugal, Andalucía y Extremadura en España, el Mezzogiorno en Italia y toda Grecia, que son las regiones menos avanzadas del sur de Europa (Petmesidou and Tsoulouvis, 1994).

El fuerte control que ejerce el Estado en la economía y en la sociedad civil griega tiene su origen en las condiciones históricas y en la trayectoria de desarrollo del país, desde su independencia del dominio otomano (1830). Subrayo aquí una característica principal de la sociedad griega, que es la ausencia de una clase social he-

gemónica que obtenga su poder político e ideológico de una posición económica dominante. Y esto a pesar de que, en algunos momentos determinados, estratos o alianzas entre estratos sociales han conseguido ganar poder y dirigir el país. Esta importante cuestión, que por supuesto no podemos examinar aquí en profundidad, da cuenta del fuerte control que ejerce el Estado sobre la sociedad civil y del predominio de lo extra-económico -medios políticos y criterios- en el proceso de distribución de riqueza, de los ingresos y las prestaciones sociales (Petmesidou, 1987). El acceso de los individuos y de los grupos sociales a los canales clientelísticos y al Estado constituye el modo primario de apropiación de recursos y prestaciones, una condición que transforma los conflictos sociales en enemistades hereditarias de poder individualista y que, por tanto, muy difícilmente favorecen una solidaridad colectiva, ni al modo corporatista-ocupacional a la manera de la Europa Central, ni de un modo más o menos universalista, como es el caso de Escandinavia y del Reino Unido.

La práctica generalmente legitimada de usar medios políticos en la apropiación de recursos ha reforzado el papel de la familia y de lo doméstico como unidad estratégica en la toma de decisiones relativas a las oportunidades de empleo de sus miembros, y a los recursos y beneficios que puedan solicitarse. De la misma forma, la familia es también una importante unidad redistributiva que provee a sus componentes de los medios para superar la desesperación, el desempleo

y la quiebra (Petmesidou, próxima publicación). Dada la incapacidad de la sociedad para crear compromisos y un consenso social que lleve a una amplia redistribución de recursos según los derechos universales de una ciudadanía social, la familia y los parientes constituyen las unidades fundamentales de apoyo. Esto tiene lugar en un contexto en el que las familia y los hogares tratan de combinar una variedad de actividades dentro de la economía formal e informal y, al mismo tiempo, buscando un empleo en el sector público al menos para un miembro de la familia, como una fuente segura de ingresos. Desde esta perspectiva, el familismo es el componente principal de un modo estatista-clientelístico de organización social. El familismo refleja una cultura individualista que sostiene una serie de derechos discrecionales a las prestaciones y servicios que se basan en criterios particularistas. De este modo se limita severamente una completa maduración de las solidaridades colectivas de la sociedad, así como el desarrollo de valores universalistas en la orientación del bienestar social. La fragmentación del seguro social, con sus grandes desigualdades en su estructura y organización, en el nivel de las cotizaciones y en los tipos y nivel de las prestaciones, constituye otro ejemplo, sorprendente y claro, de este modelo de titularidades discrecionales.

En cuarto lugar, la otra característica que es reflejo de la debilidad de la sociedad civil en Grecia es el bajo grado de su cultura y su práctica del voluntariado. Esta situación está rela-

cionada con el papel de la iglesia ortodoxa y su fuerza, en comparación con el Estado griego. En contraste con el catolicismo, que apoya la institucionalización a gran escala de la acción voluntaria en protección social en los países de la orilla europea latina, la Iglesia ortodoxa no ha tenido hasta hoy un papel significativo en la misma dirección, dentro de la sociedad griega. Se explica en gran medida por la fuerza limitada que en Grecia tiene la Iglesia frente al Estado, a diferencia de la Iglesia católica que disfruta de una autonomía mucho mayor. En la medida en que la Iglesia promovió el voluntariado en Grecia, se mantuvo una asistencia de corte filantrópico muy limitada. El programa de asistencia social llamado "certificados de indigencia" (ICs), que se otorgaba a las familias pobres hasta 1977, proporciona un ejemplo del estrecho lazo entre el Estado y la Iglesia, en un contexto en que los criterios de control político y de integración se combinaban con la asistencia caritativa (Petmesidou 1992: 125). Los clérigos eran los que presidían en los comités locales de los ICs, que daban derecho a las familias pobres a recibir un apoyo de renta muy limitado. Aun así, era frecuente que los ICs reflejaran una política de control estatal de los pobres, más que una asistencia social universalista. Es una característica que se intensificó, puesto que desde 1974 incluso se anuló la línea de pobreza que se había usado hasta entonces (Iatridis 1980: 118-121).

La expansión de la protección social en Grecia tuvo lugar, como en

otros países del sur de Europa, en la década de los ochenta, una fecha bastante más tardía que la que estableció el Estado de bienestar en el noroeste de Europa. Los tardíos intentos de reforma en la protección social fueron reflejo de los cambios sociopolíticos que desde mediados de los setenta desencadenaron un proceso de democratización social y política en Grecia. La transición hacia la democracia, iniciada en 1974, facilitó la creación de nuevas alianzas sociales y políticas que contribuyeron a reorganizar las redes clientelistas y de patronato, para incluir grandes sectores de las nuevas clases medias urbanas.

No obstante, a pesar de la retórica sobre la necesidad de una provisión universalista de bienestar, la protección social en Grecia ha permanecido poco desarrollada y altamente polarizada (Petmesidou, 1991). El sistema de seguridad social está muy fragmentado, con enormes desigualdades en el nivel de prestaciones y servicios suministrados, mientras que aún falta una red universalista que proporcione una garantía mínima de recursos. En los años ochenta se intentó establecer un sistema universalista de atención sanitaria -el Servicio Nacional de Salud- pero la reforma se centró en la atención hospitalaria y en las relaciones laborales de los médicos de hospital, dejando de lado el cuidado de la atención primaria en los centros urbanos. Por añadidura, la financiación del Servicio Nacional de Salud se basó en los esquemas profesionalistas de atención sanitaria con su abundancia y variedad de fondos

de seguros, característica que contribuyó a grandes desigualdades y a deficiencias de organización.

Una rápida ojeada al Estado de bienestar

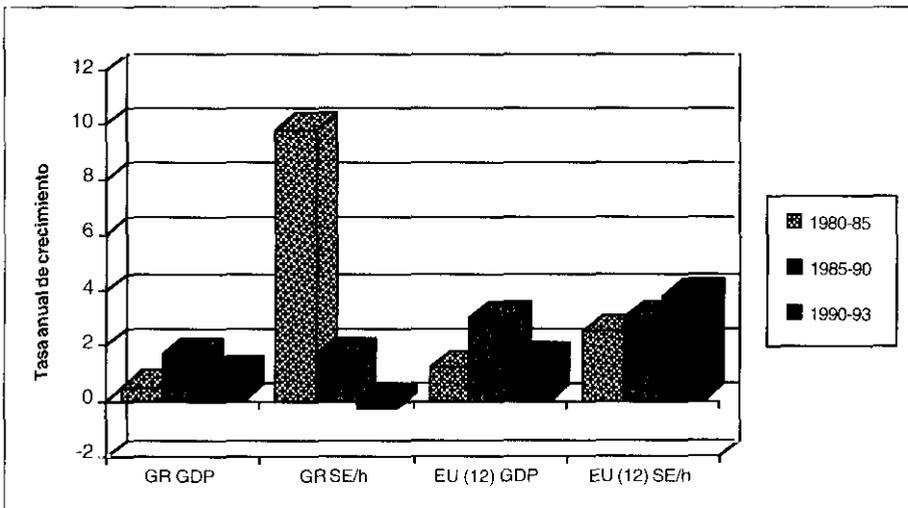
La primera mitad de la década de los ochenta es un período de rápida expansión de los gastos sociales (gráfico 1) y de significativas reformas en la política social como, por ejemplo, la introducción de un sistema universalista de atención sanitaria, el otorgamiento de una pensión asistencial para situaciones de necesidad en favor de los mayores sin derecho a pensión y sin otros recursos, y el estableci-

miento de centros de día para los mayores bajo responsabilidad de las autoridades locales.

El gráfico 1 muestra cómo el gasto social, a principio de los ochenta experimentó un gran crecimiento en comparación al PIB, y aún mayor en comparación con la media UE. Esta tendencia se ha invertido desde mediados de los ochenta.

El tardío desarrollo del Estado de bienestar tuvo lugar en un momento en que los índices de crecimiento económico del país eran muy bajos, la competencia mundial aumentaba, se producían cambios demográficos significativos y el desempleo era cada vez mayor; todas estas situaciones llevaron a una creciente crisis fiscal del

Gráfico 1
Tasas anuales de crecimiento del PIB y
gasto social per cápita en Grecia y en los 12 Estados miembros de la UE



Fuente: EUROSTAT 1987, 1995 b y 1995 c
(SE/h: gasto social per cápita. EU12: promedio de los doce Estados miembros de la Unión)

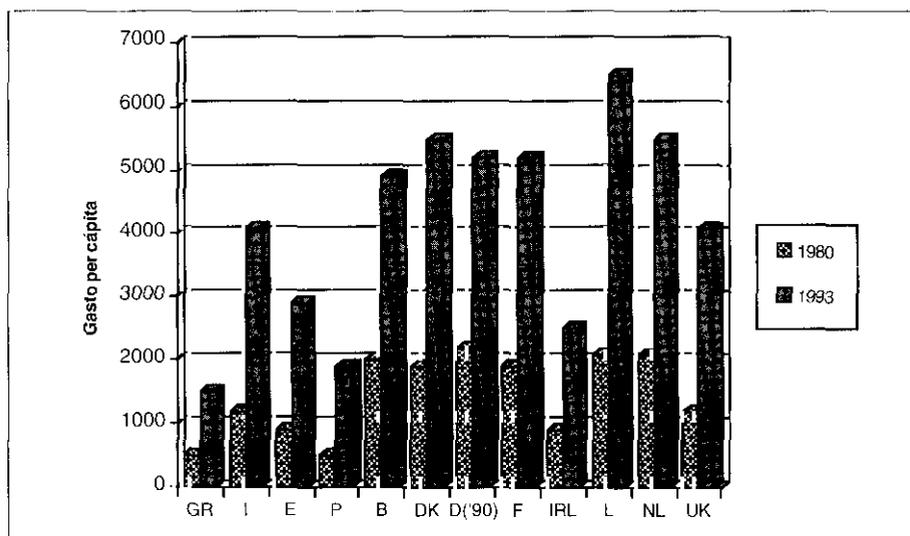
Estado que limitó la expansión del gasto social. Como resultado, el desequilibrio de Grecia en términos de gasto social, en comparación con el noroeste europeo difícilmente se ha superado y a principios de los años noventa Grecia se encontraba en la última posición entre los países de la Unión Europea respecto al gasto social per cápita (Gráfico 2).

Estas tendencias se descubren en una rápida mirada al Estado de bienestar en Grecia. Tan pronto como el país se embarcó en la expansión de su gasto social alcanzó su punto de crisis, sin lograr establecer una ciudadanía social y una filosofía del bienestar enfocada hacia la universalización del mismo. Al contrario, se mantiene y

reproduce la práctica tradicional orientada a las necesidades del individuo.

La legislación de principios de los noventa trató de reducir el déficit público y controlar la crisis de la seguridad social, aunque al mismo tiempo hizo que aumentara la polarización social. Por esta razón, el número de pensionistas que recibían la pensión mínima (bastante por debajo del umbral de la pobreza) aumentó significativamente, llegando en 1996 al 71% de los pensionistas del Fondo Nacional del Seguro, que es el más grande para los trabajadores y empleados del país. Y de hecho, en los últimos años la inadecuación de la pensión mínima y el alto crecimiento del desempleo constituyen los temas más conflictivos

Gráfico 2
Gasto per cápita en protección social en los países de la UE
(en capacidad de poder de compra -PPS- específico para el consumo privado)



Fuente: Eurostat 1995b (D '90: Alemania sin los nuevos Länder)

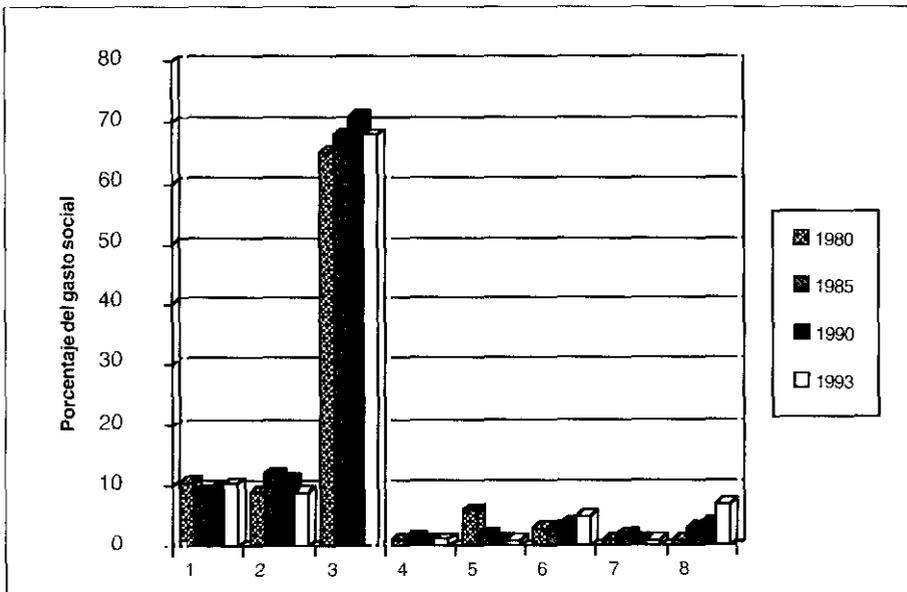
del debate, que conducen a fuertes enfrentamientos ente las asociaciones de pensionistas y los sindicatos, por un lado, y el Estado por el otro.

Por lo que se refiere a la estructura del gasto social, una característica principal en Grecia es el predominio de la garantía de recursos por encima de otro tipo de gasto social (enfermedad, familia, maternidad, desempleo y ayudas para la vivienda: ver gráfico 3). Las pensiones de jubilación, junto con las de invalidez fueron el 76 por ciento de todos las contingencias protegidas en 1993. Un dato aún más importante es que, a principios de los noventa, el 50% del total de pensionistas del Fondo Nacional del Seguro recibía pensiones de inva-

lidez, a menudo como sustitutivas de pensiones de la asistencia social, concedidas con discrecionalidad y sobre bases particularistas.

Grecia constituye un ejemplo extremo de gran fragmentación en los esquemas de seguridad social: en 1995 había 86 regímenes que administraban programas de pensiones obligatorias y suplementarias, y 236 instituciones -bajo el control de seis ministerios diferentes- que suministraban atención sanitaria y prestaciones de bienestar social. De forma similar, la polarización de los beneficios es muy alta en Grecia. La tasa de sustitución de ingresos, para un trabajador con carrera profesional completa, va aún más lejos que el salario neto en la

Gráfico 3
Composición de las prestaciones sociales (%)



Fuente: Eurostat 1995b: (1. enfermedad, 2. invalidez y enfermedad profesional, 3. vejez y supervivencia, 4. maternidad, 5. prestaciones familiares, 6. vivienda, 7. vivienda, 8. varios)

industria, alcanzando el 107% a comienzo de los noventa (Comisión 1994, 54-55). Por otra parte, aquellas personas que no están obligadas a una participación contributiva sustancial y que tienen ingresos escasos obtienen prestaciones extremadamente bajas, que llegan solamente al 8% del salario neto medio en la industria.

La protección social de los parados es igualmente inadecuada. El índice oficial de desempleo en Grecia se encuentra sobre el 10% y se espera que aumente con el declive de la industria en ciertas regiones del país. Grecia carece de programas de apoyo a los desempleados de larga duración, a pesar de que éstos son más del 50% de los parados (Eurostat 1995a). Las prestaciones por desempleo se conceden solamente por poco tiempo (sólo 12 meses) y son de las más bajas de la UE, mientras que no existen en absoluto programas asistenciales para jóvenes parados y las medidas para activar el empleo (formación profesional, empleo subsidiado) son bastante rudimentarias, alcanzando solamente el 0.4% del PIB (OECD 1995; véase también Katrougalos 1996: 54).

Por otro lado, el grado de centralización es todavía muy alto en la política social: algunas reformas introducidas en el sistema local de gobierno desde mediados de los ochenta sólo han ampliado marginalmente las funciones del gobierno local en lo relativo a la provisión de los servicios de bienestar (por ejemplo, los centros de día para los mayores y las enfermerías públicas que son responsabilidad del gobierno local).

En pocas palabras, podríamos decir que la expansión de la protección social en los ochenta estuvo fuertemente influenciada por la lógica del estatismo griego, impulsando el rol ambivalente que juega el Estado en la política social. Por un lado, el incremento del peso social y político de la clase media desde mediados de los setenta ha llevado a un debate político que reconoce la necesidad de enfrentarse a una serie de problemas, tales como la baja calidad de los servicios de bienestar, la ausencia de una red universal de seguridad en los ingresos, la ausencia de una política de vivienda etc. Aun así, por otro lado, la propia naturaleza de los conflictos sociales, que ponen trabas a los valores solidarios, tiende a bloquear cualquier solución a los problemas. La intensificación de los conflictos de la clase media por asegurar el acceso a la maquinaria estatal hace que la práctica diaria y las demandas socioeconómicas de estos grupos acaben con cualquier intento de desarrollar políticas de redistribución consistentes y eficaces. Esto explica también por qué la respuesta de los sucesivos gobiernos socialistas (PASOK) a los problemas arriba citados se limitó a discursar sobre la necesidad de descentralización y el desarrollo de un Estado de bienestar. El obstáculo más grande para el ejercicio de una política social y de una planificación social ha sido la falta de consenso entre la clase media sobre los objetivos de tales políticas y, a un nivel más fundamental, sobre cómo serían distribuidos los costes del desarrollo social y económico.

¿Cuáles son las perspectivas de futuro?

La crisis de la protección social que se da en los noventa hace necesaria una serie de cambios significativos en la sociedad y en la cultura griegas. Cabe destacar que el modo de organización social estatista/clientelista ha conducido a serios puntos muertos, dado que los conflictos sociales y políticos se han intensificado en la pasada década (como indica el fenómeno de corrupción a gran escala) haciendo difícil la legitimación social del modo discrecional-clientelístico de distribución de ingresos y beneficios. Además, la recesión económica y los cambios en los hábitos familiares (por ejemplo, el aumento de la participación de la mujer en el mundo laboral, los índices crecientes de divorcios y de familias monoparentales) han limitado seriamente la capacidad del modelo tradicional de protección social, basado en el apoyo familiar para sortear las apremiantes necesidades sociales, debido al crecimiento del desempleo (especialmente entre los jóvenes), al empobrecimiento y a la exclusión social. Esto ha puesto en marcha un proceso continuado de corrosión del tejido social, que puede llevar al deterioro del nivel de vida de muchos grupos sociales. Las cambiantes pautas de emigración, igualmente, en el área balcánica y en Europa en los últimos años han llevado a un incremento de la emigración a Grecia, principalmente desde los países ex-comunistas del este de Europa, con importantes repercusiones en las desigualdades sociales y en

la pobreza del país. El número de inmigrantes extranjeros en Grecia ha crecido muchísimo, llegando a ser el 9% de la población griega a principios de los noventa (o el 15% del total de empleados y asalariados), una proporción muy alta, según los baremos de la UE. Además, es la inmigración ilegal la que está creciendo, ya que la proporción es casi la de un legal por quince ilegales. Así se crean nuevas bolsas de pobreza y de marginación social. Ante el escaso desarrollo del Estado de bienestar y dado que los inmigrantes carecen de cualquier tipo de red familiar de seguridad para alivio de sus dificultades, éstos se convierten inevitablemente en los grupos sociales más necesitados y sometidos a explotación.

La crisis fiscal del Estado, en Grecia, ha llegado a un punto muerto, social e institucionalmente, que hace apremiante la necesidad de un cambio institucional a gran escala. Para que esto suceda es necesario que el país logre una estabilización social, creando una nueva relación entre la sociedad civil y el Estado, entre la política y la economía, entre los valores particularistas-individualistas y una cultura solidaria universalista. Este es el primer requisito para que el país se enfrente a los retos más importantes para el bienestar social, tales como la necesidad de medidas de asistencia social efectivas y universales (incluyendo la garantía de ingresos mínimos), el cambio de una filosofía del bienestar basada en políticas centralizadas de mantenimiento de rentas a una que favorezca la prestación de servicios y que responda a las necesi-

dades locales, la necesidad de una política de empleo eficiente que combatiera el paro, reestructurar las profesiones y regular los trabajos ilegales y la inmigración ilegal.

Dado que hasta ahora el país ha sido incapaz de responder a estos retos y superar la crisis institucional y fiscal, uno podría imaginar que la presión externa derivada de una política social solidaria a nivel supranacional (por ejemplo, una Europa social revigorizada) podría precipitar los cambios sociales requeridos y las reformas del país. Y, de hecho, si la dimensión social de la UE no actúa con rapidez, es muy posible que las regiones menos desarrolladas de Europa sufran profundas conmociones con devastadores efectos en la integración social, produciendo una marginación y empobrecimiento a gran escala.

El objetivo de lograr una unión monetaria, establecido en el Tratado de la Unión, asestó un duro golpe a los débiles Estados de bienestar del sur de Europa, y en particular a Grecia. El enfoque unidimensional de la disciplina fiscal ha reducido sensiblemente el gasto social, con efectos perjudiciales en el nivel de vida de la población. Dado que las estructuras tradicionales de apoyo están desapareciendo, a pesar de no haber sido reemplazadas por una nueva filosofía de bienestar universal, es muy probable que la integración europea produzca una extensión de la inestabilidad so-

cial e intensifique la actual crisis institucional en Grecia.

Referencias

- COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (1994): *Social Protection in Europe*. DG V, Brussels.
- EUROSTAT (1987): *Basic Statistics of the Community*. Luxembourg.
- (1995a): 'Population and Social Conditions'. *Statistics in Focus*, 6, 1-10.
- (1995b): *Social Protection Expenditure and Receipts 1980-1993*. Luxembourg.
- (1995c): *Basic Statistics of the Community*. Luxembourg.
- IATRIDIS, Demetrius S. (1980): *Social Planning and Policy Alternatives in Greece*. National Centre of Social Research, Athens.
- KATROUGALOS, George S. (1996): 'The South European Welfare Model: The Greek Welfare State, in Search of an Identity'. *Journal of European Social Policy*, 6, 39-60.
- OECD (1995): *Employment Outlook*, Paris.
- PETMESIDOU, María (1987): *Social Classes and Processes of Social Reproduction*. Exantas, Athens (in Greek).
- (1991): 'Statism, Social Policy and the Middle Classes in Greece'. *Journal of European Social Policy*, 1, 31-48.
- (1992): *Social Inequalities and Social Policy*. Exantas, Athens (in Greek).
- (1996): 'Greece, Turkey and Cyprus: Poverty Research in a Policy Vacuum', pp. 287-324 in E. Oyen, S.M. Miller and S.A. Samad (eds.) *Poverty. A Global Review*. Scandinavian University Press, Stockholm.
- (forthcoming): 'Social Protection in Southern Europe: Trends and Prospects'. *Journal of Area Studies*.
- and LEFTERIS, Tsoulouvis (1994): 'Aspects of the Changing Political Economy of Europe: Welfare State, Class Segmentation and Planning in the Postmodern Era'. *Sociology*, 28, 499-519.

María PETMESIDOU
Universidad de Creta (Grecia)
Traducción: Patricia GARCÍA-MALTRÁS